

GACETA DE PUERTO-RICO.

SE PUBLICA

SE SUSCRIBE

Todos los Mártes, Jueves y Sábados.



En la Imprenta de Gonzalez. Fortaleza 15.

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

AÑO 1873.

JUEVES 24 DE ABRIL.

NUM. 49.

PARTE OFICIAL.

GOBIERNO SUPERIOR CIVIL

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

La Ley de 22 de Marzo de este año que declaró abolida para siempre la esclavitud en esta Provincia, exige su más rápido cumplimiento, tanto por razones de humanidad puesto que sus beneficios no deben dilatarse un solo día, cuanto por conveniencia pública, para evitar las dudas y los conflictos de intereses, que como es lógico, no puede menos de ocasionar una medida tan profundamente trascendental en el orden social y económico.

Con tal propósito y usando de las facultades que se me han conferido por el Ministerio de Ultramar en 26 de Marzo último, me he apresurado á formular el Reglamento que sigue, el cual contiene en sus disposiciones el espíritu y mente de la Ley, y en la manera posible, dadas las circunstancias especiales de este país, los medios más á propósito para que la abolición se realice pacífica y tranquilamente, sin perturbaciones y con las garantías indispensables para todos los intereses.

Extinguida totalmente la esclavitud en esta Provincia, es indudable que la Ley de abolición parcial de 4 de Julio de 1870 ha quedado derogada y sin efecto. Aquella fué una Ley preparatoria, provisional, interina. La Ley definitiva se ha dictado, y en sus disposiciones deben incluirse todos los que han sido declarados libres hasta ahora. La Ley general excluye la parcial y sería absurdo que coexistieran dos disposiciones distintas para un mismo fin, y que los libertos que deben su nueva vida social á una misma causa, se sujeten en sus derechos futuros á reglas diversas.

Bajo ese principio, que es indiscutible, el Reglamento asimila á los libertos de la Ley de abolición parcial con los que hoy empiezan á gozar de la libertad. Así, todos disfrutará de las mismas ventajas; serán nivelados en sus derechos y obligaciones, y el patronato, que extendiendo el trato de la servidumbre hasta los 22 años del liberto por nacimiento, conservaría en esta Provincia instituciones esclavistas por mucho tiempo, desaparecerá sin perderse ninguna de sus ventajas, admisibles cuando se trataba de la emancipación de una sola clase de esclavos, inútiles hoy, en que todos los que fueron siervos entran en la vida del derecho común, y deben regirse por las mismas reglas. Siendo otra poderosa razón de esa asimilación de libertos en una misma Ley la de que, la que hoy se cumple les proporciona más conocidos beneficios que la anterior.

Una condición se impone al liberto, que es el trabajo por contratación durante tres años, como preparación para su vida futura de hombre libre y como medida de transición entre el trabajo forzado y el voluntario. Esa condición constituye un deber en el liberto, un vínculo de obligación que la autoridad está en el caso de hacerle cumplir por todos los medios coercitivos si fuere necesario. Para ello se dictan las disposiciones oportunas y únicas que convienen con el estado de la legislación de esta Provincia, respecto al trabajo y con los principios generales de derecho que rigen universalmente en esta materia.

Se rodea al liberto de la vigilancia indispensable para que cumpliendo su deber se contrate; y los casos de resistencia que puedan ocurrir se previenen con medidas y penas apremiantes que llegan hasta donde, como he dicho, pueda alcanzar la legislación general existente en la materia.

Entre esas medidas, se establece que el liberto sea contratado por el Estado, forzosamente, cuando no quiera hacerlo con sus antiguos poseedores, ó particulares. Tal determinación es justa y necesaria.

El Estado representado por la Administración General, la Provincia ó el Municipio, tiene obras

en que emplear á los libertos, y las Autoridades que entenderán en esos contratos, fuerza y medios de coerción suficientes para dominar la injusta resistencia del liberto si sucediere. Ni puede decirse que se violenta el trabajo con esa fuerza coercitiva que se indica por que en último extremo la contratación forzosa con el Estado, se hace con las garantías necesarias para el liberto y es medio indispensable para que este no burle sus deberes.

La contratación de servicios del liberto, no ha sido desatendida por la Ley; y ántes por el contrario ésta la protege y rodea de precauciones. Por la ignorancia natural del que apenas ha salido de la triste condición de esclavo, se establecen como curadores de los libertos tres funcionarios que se denominarán "Protectores de los libertados." Estos tienen la alta misión de velar por ellos en sus contratos, de asistir á sus otorgamientos, de procurar que no se cohiba por ningún medio la voluntad de sus protegidos; de ampararlos y de defenderlos en cuanto á la contratación se refiera. Tan noble y humanitario cargo es una importantísima garantía para los libertos.

Pero las facultades de los Protectores, como se ve, está únicamente limitada á la esfera de la contratación; fuera de ella, el liberto, goza de los mismos derechos que los demás hombres libres; y por tanto, si gestionase esos derechos, deberá hacerlo en la forma y modo que establecen las leyes comunes. No hay en la Ley nada que estienda la protección de los funcionarios aludidos á todos los asuntos de los libertos; solo se contrae á la contratación, lo que demuestra que su mente es que el liberto se considere como hombre libre en todo lo demás.

Tres son los Protectores de libertos que ordena la Ley. Es indudable que ni pueden desempeñar sus cargos colectivamente por las dificultades que se ofrecerían, ni las funciones diarias, constantes y múltiples que se le encargan, podrían llenarlas cumplidamente en toda la Provincia, por la distancia de los pueblos y la necesidad de su presencia en los actos de contratos.

De ahí la necesidad de dividir este territorio en tres Departamentos, asignando á cada uno los pueblos que le correspondan en vista del censo de libertos y nombrando un protector para cada centro.

La imposibilidad de que estos concurren á las localidades de su departamento, ha hecho también que se establezcan delegados en los pueblos para que desempeñen el cargo. Estos delegados, parece lo más apropiado y lógico que sean los Síndicos de los municipios, que siempre han tenido la misión de defender al esclavo como cargo concejil.

Organizada así la protección del liberto, la forma de los contratos y la naturaleza y efectos de estos, ha sido también objeto del Reglamento, como punto importante para alejar dudas y reclamaciones que pueden provenir del silencio de la Ley.

En la forma del contrato se ha buscado la mayor solemnidad y justificación plena de la verdad. Se otorgará ante la Autoridad de este Superior Gobierno ó funcionario que delegue, en la Capital y en los pueblos ante las Autoridades locales: se registrará en libros impresos, sellados y foliados; se harán constar con toda precisión las cláusulas que se conviniere, y sobre todo, las indispensables en esa clase de estipulaciones; y con tales requisitos, es evidente que el contrato llenará su fin y no habrá lugar á dudas ni á cavilaciones.

Para que este Gobierno Superior tenga el registro general y pueda ejercer su alta vigilancia, y para que á los protectores les sea dado desempeñar sus funciones en todo el departamento, se les remitirán copias de los contratos, que estos últimos revisarán y enmendarán si fuere menester.

La libertad de la contratación es la base de que debe partirse.

Si al liberto se le impone el deber de trabajar 3 años contratado, no por eso se cibe ese deber al preciso término de esos tres años con un solo contratante, ni se limita su voluntad en lo más mínimo respecto al precio y condiciones de su trabajo. El liberto en esa parte debe equipararse

al hombre libre: ha de contratarse; pero por el tiempo que le convenga y con los pactos lícitos que le plazcan. Otra cosa sería continuar en su estado de servidumbre hasta extinguir el plazo trienal del contrato.

Atendido ese principio, el Reglamento declara rescindibles los contratos á voluntad de las partes aunque con sujeción del que lo hiciere sin justa causa, ó se separase de él caprichosamente, á la indemnización de perjuicios por el daño causado que ordenan las leyes.

Procede también la rescisión por infracción de los términos estipulados, y si esas cuestiones se promovieren, ú otras provenientes de la contratación, á la Autoridad gubernativa se recomienda su resolución, conalzada ante este Gobierno, tanto por la naturaleza especial del asunto, que es en su origen y esencialmente de orden público, como por la celeridad que exige esa clase de determinaciones.

Esto no obsta para que las demás cuestiones de propiedad ú otro género que tuviese el liberto fuera de su contratación, se ventilen ante los Tribunales correspondientes.

Para hacer efectivas las correcciones é indemnizaciones que imponerse puedan á los libertos por sus faltas en los contratos y otras causas, tiene este primero, su peculiar que, gracias á la forma benéfica que siempre se ha dado en esta Provincia á la esclavitud poseen muchos de ellos, y á falta de su peculio, su jornal, que puede ser embargado en la proporción que establece la ley de Enjuiciamiento civil. Así no harán ilusorios sus deberes.

La obligación del trabajo por contrato solo es exigible á los que estén en aptitud. La Ley no puede ir más allá; el Reglamento exceptúa, pues, de esa obligación á los imposibilitados, ya por causa temporal, ó permanente, disponiendo que se dé cuenta á la Autoridad para su registro oportuno.

El trabajo del liberto es indispensable si se ha de respetar la Ley y cumplir sus fines. En ello están interesados grandemente los propietarios é individuos que se utilizan de sus servicios.— El Gobierno debe por otra parte establecer medidas que aseguren la efectividad de ese deber del liberto. Respecto á este ya se han visto las disposiciones dictadas al efecto; las únicas que pueden adoptarse para cohibirle si se resistiese. A los propietarios y contratantes cualesquiera que sean, se les impone en el Reglamento una multa progresiva si permiten que el liberto les trabaje sin contrato; y á la Autoridad local respectiva, se le encarga, bajo su responsabilidad, la más esquisita vigilancia en ese particular.

No pueden llevarse mas lejos las precauciones, ni buscar mejor sanción para el efecto deseado.

La situación futura de los libertos desgraciadamente no es la misma para todos. Hay ancianos, enfermos, incapacitados y niños que no pueden ganar por sí mismos su subsistencia, ni cuentan con recurso alguno para la vida libre que se les ha dado. Esa dificultad no obsta, sin embargo, y se obvia fácilmente. La Ley de 4 de Julio de 1870 atendía á esas clases de desvalidos, con el patronato; pero esa Ley no puede subsistir, porque cesó la causa que la motivara, porque está derogada implícitamente por la Ley actual, y además porque el patronato, inútil para el anciano de 60 años que puede renunciarlo cuando quiera, es perjudicial para el liberto niño, porque en cambio de las ventajas que le concede, lo sujeta á una especie de condición servil que dura hasta los 22 años, consecuencia que no puede admitir la nueva Ley.

Eliminado el patronato, el espíritu de la Ley sujere el único y mas legal medio que existe para atender á los libertos indicados.

Estos entran desde luego en la vida civil de los demás ciudadanos, excepto en el goce de los derechos políticos y la restricción del trabajo trienal. Por lo demás forman parte de los asociados y tienen derecho igual á sus ventajas. El criterio, pues, que debe aplicarse es el del derecho común. Por tanto, el Reglamento partiendo de esa justa base, para los niños que por su edad no pueden subvenir á sus necesidades, si tienen padres, les encarga de su cuidado y subsistencia,

puesto que á ello les obliga el derecho natural y las leyes vigentes; y si como huérfanos, carecen de ellos, los entrega á la protección pública que la Beneficencia organizada ya por el Estado, la Provincia ó el Municipio dá á los demás de su clase y situación.

Para los ancianos é imposibilitados, se ha establecido también este último medio, como el único posible en la actualidad.

La Ley que se cumplimenta, en su sabiduría y prevision no ha olvidado estos casos de libertos desamparados y desprovistos de todo recurso, y en su artículo 8º ofrece dictar las disposiciones de beneficencia y trabajo que sean necesarias. Esas disposiciones completarán la obra; y mientras llegan, las medidas interinas expresadas, no queda duda, que serán bastantes para remediar el mal.

La organización de los funcionarios y empleados que han de intervenir en el planteamiento de la Ley, tiene sus gastos indispensables que no pueden eludirse, y es preciso atender á ellos. La Provincia es la que se halla obligada por la Ley á indemnizar el valor de los esclavos emancipados como carga de su presupuesto, y es lógico que lo sea también de los demás gastos precisos para que la emancipación se realice. Mi Autoridad está penetrada de que la Provincia no rechazará ni se opondrá á ese dispendio.

Como los Protectores ejercen un cargo de responsabilidad y sumo cuidado y trabajo, sería difícil hacerlo honorífico y gratuito, y se le retribuye con el sueldo de 12,500 pesetas anuales, computándose en ese sueldo el que hubiere el nombrado si fuere empleado activo ó pasivo, con lo cual se haría una economía. Los Alcaldes y Corregidores, además, tienen por su intervención en los contratos y obligaciones que les impone este Reglamento, una suma inmensamente mayor de trabajo, y se ven en la necesidad de buscar empleados auxiliares que se ocupen exclusivamente de este Ramo. Para llenar esa necesidad he autorizado á los Municipios para aumentar un Negociado en su Secretaría con el personal que sea conveniente, y con el sueldo que se le designe con cargo al presupuesto.

La premura con que se ha formulado este Reglamento y las dificultades que no pueden menos de presentarse en la práctica, quizá hayan dejado algún vacío en lo dispuesto y se ofrezcan dudas é interpretaciones; por eso deberán consultarse inmediatamente á este Gobierno quien las resolverá en seguida para que no se entorpezca de ninguna manera la ejecución de la Ley y se toquen cuanto antes sus saludables efectos.

A mi juicio, el Reglamento interpreta bien y fielmente la Ley, en cuyo espíritu he procurado con meditación profunda inspirarme. Si las Autoridades subalternas, los Protectores y Delegados en los pueblos y los propietarios, me secundan y cumplen cada uno sus respectivas obligaciones con el celo que es de esperarse, cuando se trata del planteamiento de una Ley, cuya trascendencia en el porvenir, riqueza y orden de esta Isla es tan importante, estoy convencido que á la inmensa satisfacción que experimento por ser la Autoridad que realiza este gran pensamiento de la Nación, se unirá el más feliz resultado y éxito futuro para honra y prez de esta Provincia que acreditará una vez más su sensatez, sus sentimientos humanitarios y amor á la Patria.

REGLAMENTO

PARA LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO

DE LA LEY DE 22 DE MARZO DE 1873.

SOBRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD,

EN SU PARTE RELATIVA

á la contratación del servicio de los libertos.

Artículo 1º Los libertos quedan obligados á celebrar contratos de servicio con los que fueron sus dueños, con otras personas, ó con el Estado, por un tiempo que no bajará de tres años.